

EDITORIAL

Reforma al SEIA: Nueva institucionalidad

El desafío de Chile no radica en elegir entre desarrollo y sostenibilidad, sino en diseñar un sistema capaz de articular ambos objetivos de manera efectiva.

En medio de un escenario global marcado por la urgencia climática, la transición energética y la necesidad de reactivar las economías, Chile ha puesto en marcha un proceso de modernización de su institucionalidad ambiental que tiene como eje central al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Lejos de tratarse de un ajuste menor, esta transformación refleja una tensión estructural: cómo compatibilizar estándares ambientales cada vez más exigentes con la necesidad de viabilizar inversiones estratégicas para el desarrollo del país.

El desafío no es trivial. En los últimos años, el SEIA ha enfrentado críticas por su extensión en plazos, superposición de competencias y espacios de discrecionalidad que, en la práctica, han derivado en incertidumbre para los titulares de proyectos. Sectores clave como la minería y la energía -protagonistas de la transición hacia una matriz más limpia y de la provisión de minerales críticos- han sido particularmente sensibles a estas ineficiencias, viendo postergadas decisiones de inversión relevantes.

Sin embargo, reducir esta discusión a una mera agilización de tiempos sería un error. El proceso de reforma apunta, en esencia, a mejorar la calidad del sistema: fortalecer la certeza jurídica, robustecer la coordinación interinstitucional y avanzar hacia evaluaciones más técnicas, consistentes y proporcionales al riesgo ambiental de cada proyecto. Esto implica, entre otros aspectos, diferenciar adecuadamente entre iniciativas de alto y bajo impacto, evitando que todas enfrenten el mismo nivel de exigencia procedimental.

En este contexto, la modernización del SEIA aparece como una oportunidad para corregir distorsiones históricas. La eliminación de duplicidades, la estandarización de criterios y la incorporación de mejores herramientas técnicas pueden contribuir no solo a acortar plazos, sino también a elevar la predictibilidad del sistema. Ello es clave para un país que busca posicionarse como proveedor confiable en cadenas globales vinculadas a la descarbonización, donde los tiempos de desarrollo de proyectos son un factor competitivo decisivo.

No obstante, el equilibrio es delicado. Una institucionalidad ambiental debilitada no solo comprometería la protección de los ecosistemas, sino también la legitimidad social de los proyectos, un factor cada vez más determinante en su viabilidad.

La evolución del SEIA, por tanto, no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como parte de una estrategia más amplia de desarrollo sostenible. Si logra avanzar en eficiencia sin sacrificar rigor técnico ni estándares ambientales, Chile no solo destrabará inversiones, sino que también consolidará una institucionalidad acorde a los desafíos del siglo XXI.



Ilustración: Fabián Rivas